

Colombia: ¿Cuál es su futuro?

RUBÉN DARÍO

Psicólogo, Postgrado en Resolución de Conflictos, Derecho Internacional Humanitario.
Ex Zar Antisecuestro de Colombia y Negociador en cuatro procesos de Paz con la guerrilla en Colombia

MANUEL GUEDÁN

Profesor de la Universidad de Alcalá y Director de la Revista Quórum

Colombia cumple 183 años como nación independiente; durante este tiempo ha tenido muy pocos períodos que propiamente se puedan llamar de paz y en los que no hayan estado transitando por la geografía nacional ejércitos haciendo marchas y contramarchas, o en los que no haya habido guerrillas de todo signo esperando emboscados, volando oleoductos o secuestrando y paramilitares realizando masacres y desapareciendo periodistas, campesinos y sindicalistas.

Desde las primeras conversaciones de paz con la guerrilla colombiana iniciadas en el gobierno de Belisario Betancur en los años 80 los partidos políticos, representantes de las elites económicas y sociales se han involucrado en un “voluntarismo por la paz” pero sin llegar a tomar ninguna decisión real avalada por consensos entre sí para buscar fórmulas viables que permitan terminar con la guerra interna y el grave problema social de 25 millones de colombianos excluidos sistemáticamente de sus derechos mínimos como tener empleo, acceder a la salud, educación y un nivel de vida digno.

Colombia esta sumida en una profunda crisis humanitaria como consecuencia de la degradación a la que ha llegado esta última confrontación que lleva aproximadamente 40 años.

Los actores armados del conflicto como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación), las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) utilizan el paradigma “en la guerra todo es válido” para cumplir sus objetivos y los métodos violentos adquirieron vida propia y se convirtieron en fines. Hoy nos encontramos en un conflicto carente en apariencia de estructura y de estrategia, pareciera que su objetivo fundamental es sembrar el terror dentro de la población civil donde cada bando se toma el derecho de etiquetar las poblaciones dentro del esquema “ami-

gos" o "enemigos" y dependiendo de la clasificación realizan operaciones militares para ganar territorios a través del asesinato de líderes comunales o el desplazamiento forzado; secuestran como fuente de recursos económicos, desaparecen personas como mecanismo de eliminar todo lo que considera contrario a sus "ideas"; dinamitan torres de energía, oleoductos y en términos generales destruyen todo lo que se mueve, agita o respira porque de acuerdo a sus percepciones son obstáculo para el logro de sus "objetivos".

LAS GUERRILLAS

Las guerrillas se alejaron de la política debido principalmente al asesinato de 3.500 integrantes de la Unión Patriótica –partido político creado por esta organización durante las conversaciones de paz de los 80– dedicándose en los últimos años al fortalecimiento militar donde hoy cuentan con aprox. 17.000 hombres en armas y de otro lado a los fallidos procesos de paz entre el gobierno y el E.L.N. que tiene en sus filas aprox. 4000 combatientes –organización que ha recibido duros golpes de los grupos paramilitares–. Son inmunes a las exigencias de respeto a la población civil por parte de la comunidad internacional ;a la aplicación del D.I.H. (Derecho Internacional Humanitario); su fortaleza militar les ha hecho prepotentes a la hora de hacer un balance entre sus acciones militares y las súplicas de la población para que paren la guerra: ni aceptan la crítica, ni se hacen la autocrítica.

En el campo de las negociaciones con el gobierno consideran erróneamente que la mesa de conversaciones es para solucionar todos los problemas del país y no el mecanismo válido para abrir los espacios democráticos donde el ciudadano pueda elegir libremente sobre su futuro. No han podido distinguir entre lo ideal y lo posible. Asumen la vocería de los sindicatos,agregaciones agrarias y asociaciones civiles con el fin de justificar su lucha con una estructura de valores completamente distinta a la de los campesinos, sindicalistas y demócratas en general que les hace difícil conseguir apoyo social para su accionar.

En cualquier situación de guerra interna o externa existen unos límites éticos avalados internacionalmente que hacen posible establecer una clara diferencia entre la guerra y el terrorismo. Los actos de guerra tienen que tener una justificación no sólo ideológica sino social.

PARAMILITARES O AUTODEFENSAS

Los grupos de paramilitares o autodefensas se han dedicado a masacrar y a desaparecer a cualquiera que sea considerado por ellos como guerrillero, auxiliador o simplemente porque está en una zona dominada por éstos. Su fuerza está en el apoyo de amplios sectores de la dirigencia política, económica y social del país que ven en ellos la manera de mantener sus privilegios y comprar grandes extensiones de tierra gracias a los desplazamientos forzados. El comandante Man-

culo de las A.U.C. expresó recientemente a los medios de comunicación que en las pasadas elecciones habían elegido 35 parlamentarios. Al respecto el Ministro del Interior de Colombia, Armando Estrada Villa, reconoció en rueda de prensa que los paramilitares sí se infiltraron en el Congreso, mediante presión a los electores en las pasadas elecciones del 10 de marzo. En ese mismo sentido el Procurador General de la Nación denuncia que en el país ya no solo se compran votos sino jurados y aseguró que adelantará investigaciones para castigar a los culpables. Igualmente los paramilitares son un instrumento militar utilizado por miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia como se ha constatado en las investigaciones internacionales realizadas por la O.E.A. (Organización de Estados Americanos), el Alto Comisionado para la Paz enviado por la O.N.U. y por A.I. (Amnistía Internacional).

NARCOTRAFICANTES

Mientras el país sigue este lento pero seguro camino de autoaniquilamiento los narcotraficantes aprovechan el desorden para realizar sus operaciones ilícitas haciendo pactos comerciales con la guerrilla quienes cuidan los sitios de producción de hoja de coca y laboratorios obligando a la mafia a pagar un “impuesto de gramaje” o retribuyéndole los servicios prestados a los paramilitares ya sea con dinero o con el suministro de armas. Igualmente siguen participando en la política, en la economía y en general en la vida social de la nación instaurando en los jóvenes nuevos paradigmas como el de “enriquecimiento fácil y rápido”, y valorando negativamente la vida de los jóvenes para convertirlos en sicarios. Hoy se hace más difícil el control de estos sectores porque de grandes carteles de la droga han pasado a organizaciones más pequeñas y menos presuntuosas en sus maneras de vivir y de adquirir bienes. El asesinato de monseñor Duarte Cancino en la ciudad de Cali quien había denunciado que los dineros del narcotráfico servían para la elección de congresistas es una clara muestra de su intervención directa en las decisiones políticas de Colombia.

LA DELINCUENCIA

La atención de las autoridades en controlar el accionar de la guerrilla y en algunas ocasiones a los paramilitares hace difícil la represión sobre las bandas de la delincuencia organizada que tienen una gran actividad en el robo de vehículos (37.000 en el 2001), robo en apartamentos (12.582 en 1999); asalto a bancos (674 en el 2001) entre otros. Los delitos transnacionales como la compra y venta de armas, el tráfico de personas en especial de mujeres para la prostitución, el lavado de activos, la falsificación de moneda extranjera y el tráfico de drogas son algunas de las formas del accionar cotidiano de centenares de personas decididas a jugar su futuro entre la búsqueda rápida del dinero, la cárcel o la muerte. En España la población carcelaria de ciudadanos colombianos llega a los 2.000 detenidos.

LOS DIRIGENTES

Una buena parte de los representantes de las élites económicas, sociales y políticas no desean la paz: se benefician de la guerra. La guerra es solo un medio para conseguir sus fines de lucro, no construyen futuro sino buscan la utilidad económica rápida. Florecen las compañías de seguridad privada (con 220.000 personas), las compañías de seguros, los medios de comunicación, las empresas de blindaje de coches y compañías multinacionales que se aprovechan del caos para obtener menos controles y más utilidades entre otros. Los medios de comunicación están en manos de los 5 grupos económicos más fuertes con un del 90% del total de la prensa hablada y escrita y los canales de tv. Esta situación es aprovechada para movilizar a la opinión pública hacia políticas neoliberales, como es el caso de desacreditar las empresas estatales de los servicios públicos para obligar al Estado a su privatización.

Respecto a la globalización los empresarios colombianos y los representantes de las compañías internacionales quieren manos libres para que no se ejerza control a los “capitales golondrina” y no se regulen las formas de resolver los conflictos de intereses con las transnacionales ocasionando grandes pérdidas para el patrimonio del Estado. La clase dirigente es incapaz de plantear propuestas serias para realizar una gran política de control a la evasión de impuestos como mecanismo útil para la redistribución de ingresos que pondría en marcha planes sociales; para ellos solo son legítimas las autoridades fuertes que defiendan sus privilegios y las autoridades débiles que no apliquen la ley cuando va en contra de sus intereses. Las palabras solidaridad y responsabilidad social no están en sus diccionarios. Se requiere de una nueva clase dirigente empresarial que de un salto cualitativo y cuantitativo de su pasado de dominación y exclusión a un presente y futuro de resolución de los conflictos por medio del diálogo, los consensos y los pactos políticos y sociales.

LA POBLACIÓN CIVIL

Es indispensable iniciar acciones para fortalecer las redes sociales con el fin de tener una sociedad civil actuante en la vida política, económica y social del país. Se debe trabajar de manera inmediata en la reestructuración de los lazos familiares rotos por la violencia, el desplazamiento y la emigración (4 millones de colombianos viven en el exterior). Una sociedad que inicie un cambio cultural pasando del individualismo a la cohesión de la ciudadanía, en el trabajo de solucionar sus conflictos de manera civilizada, que exija sus derechos pero a su vez cumpla con sus responsabilidades.

RESUMEN

El resultado electoral del pasado 26 de mayo tiene muchas interpretaciones pero hay una constante: el hastío de los colombianos por la violencia. En departamen-

tos controlados por los grupos paramilitares como Córdoba ganó el candidato que ofrecía diálogo para solucionar el conflicto (Serpa) y en los departamentos de control guerrillero como Caqueta y Meta ganó el candidato que ofrecía la pacificación por medio de la fuerza (Uribe).

Tabla 1				
Votación total	Boletín No. 034	22:16	98,99% mesas escrutadas	
	Potencial electoral: 24208150 votos		Votos en blanco: 1,78%	
Votación departamental	Total de votos: 10.991.531		Votos nulos: 1,35%	
Votación en el exterior	Abstención: 54,6%		Votos no marcados: 0,95%	
	Número tarjetón	Movimiento político	Número de votos	% de votación
Álvaro Uribe Vélez	004	Primero Colombia	5.829.958	53,04%
Horacio Serpa Uribe	008	Partido Liberal Colombiano	3.486.384	31,72%
Luis Eduardo Garzón	001	Polo Democrático	679.201	6,18%
Noemí Sanín Posada	002	Movimiento Sí Colombia	639.585	5,82%
Ingrid Betancourt	010	Partido Verde Oxígeno	53.939	0,49%
Harold Bedoya Pizarro	003	Fuerza Colombia	52.710	0,48%
Francisco Tovar Garcés	005	Defensa Ciudadana	16.396	0,15%
Augusto Lora Ramírez	007	Movimiento 19 de abril	12.724	0,12%
Alvaro Cristancho Toscano	009	Movimiento de Participación Comunitaria	10.117	0,09%
Guillermo Cardona Moreno	006	Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia	8.464	0,08%
Rodolfo Rincón Sosa	011	Movimiento de Participación Comunitaria	6.588	0,06%

La elección de Álvaro Uribe como nuevo presidente con el 53% de los votos (ver recuadro) –evitando una segunda vuelta electoral– donde su principal promesa era la pacificación del país lo compromete a un trabajo titánico respecto al mantenimiento del orden público, el saneamiento de las finanzas, lograr la inversión extranjera, el respeto a los derechos humanos y frenar la permanente fractura de la sociedad.

El pesimismo nos dice que en el corto y mediano plazo se agudizará el conflicto armado con las consecuencias nefastas para la primera víctima de la guerra que es la población civil; aumentarán los desplazados, el desempleo, la delincuencia organizada y común y más colombianos estarán sumidos en la miseria sino se empieza a aplicar los correctivos ahora: ¿es posible construir la paz realizando los cambios estructurales desde ahora y no esperar el resultado de posibles negociaciones con los alzados en armas? ¿Es posible ahorrar sufrimientos a la población civil mediante acuerdos parciales entre los actores del conflicto como es el acatamiento al derecho internacional humanitario? ¿Es posible hacerle entender a los

políticos que desean más guerra que ésta produce altos costes humanos, políticos, económicos, sociales y culturales tanto para perdedores como para ganadores? ¿Es viable que las Fuerzas Militares acaten cabalmente las directrices de la autoridad civil?

Los sucesos del 11 de septiembre vienen sirviendo a los pregoneros de la guerra como excusa para adelantar en el país una campaña GUERRERISTA como salida única al conflicto, el señor Uribe no puede caer en ese juego metiendo directamente al conflicto –como lo propuso en su campaña– a un millón de colombianos como informantes de las fuerzas armadas. Quienes siguen pensando que la salida negociada todavía es viable no pueden ser mirados con sospecha y pasar a ser posibles víctimas de las acciones paramilitares. Afortunadamente el nuevo presidente en sus primeras declaraciones ha solicitado la intermediación internacional para hablar con todos los grupos armados.

LAS TAREAS INAPLAZABLES

1. Apoyo Internacional: Buscar con representantes de la Unión Europea conversaciones serias con todos los alzados en armas para alcanzar una tregua bilateral con supervisión de la O.N.U. como mínimo de 6 meses para que durante este tiempo se construyan las bases de negociación que conduzcan a una firma definitiva de cese de hostilidades y a su vez se desarrollen todos los mecanismos disponibles para lograr un consenso entre la población civil, los grupos económicos, los partidos políticos y organizaciones sociales en el sentido de planificar una política de cambio estructural del Estado. Es indispensable no renunciar a la salida negociada de los conflictos.
2. Legitimidad y Gobernabilidad: Son gobiernos elegidos en las urnas pero los ciudadanos no acatan la institucionalidad, no tienen un código compartido donde uno otorga y permite ejercer los derechos civiles y el otro en contraprestación cumple con sus obligaciones como medio eficaz de obtener estabilidad y gobernabilidad; hay sectores del territorio nacional donde no hay presencia del Estado y la autoridad es asumida ya sea por la guerrilla, los paramilitares o los grupos armados al servicio de los narcotraficantes, los esmeralderos o terratenientes.

Es prioritario una reforma política que incluya a la gran mayoría de los ciudadanos para que éstos participen en las decisiones que mejor convengan para la convivencia pacífica con plena confianza y garantía en que serán elecciones transparentes y habrá independencia del elector al elegir entre varias opciones. En las últimas elecciones parlamentarias de los pasados 10 de marzo hubo una abstención del 58% y el cuestionamiento sobre la eficiencia y transparencia del conteo de votos llegó al punto de que se está solicitando unas nuevas elec-

ciones. Varios meses después de las elecciones presidenciales no se habían expedido las credenciales de los congresistas.

Las causas de la crisis de gobernabilidad y legitimidad no son sólo el narcotráfico y el conflicto armado, sino también los altos índices de corrupción, la falta de un propósito nacional, el incumplimiento sistemático de los gobernantes con sus electores y en especial su incapacidad para construir confianzas entre los colombianos y credibilidad ante la comunidad internacional.

3. Un Cambio Cultural: Se debe realizar el mayor esfuerzo a todo nivel para modificar las costumbres generalizadas del colombiano de resolver sus conflictos por fuera de la legalidad y el tener poco respeto su vida y la de los demás.

Desde los últimos 20 años se viene teniendo un promedio de 28.000 homicidios anuales (un promedio de 72 homicidios diarios) de los cuales el 20% está relacionado directamente con el conflicto armado, el resto son homicidios por deudas monetarias, pasionales, intra familiares, venganzas, imprudencias automovilísticas, efectos del alcohol y atracos entre otros.

Desde 1977 hasta la fecha hay denunciados 4.300 casos de desaparición.

Este principio de respeto a la vida debe ser incorporado a la conducta cotidiana de todo ciudadano como base fundamental de la construcción de una sociedad civilizada. Como ejemplo de esa intolerancia el 23 de marzo del presente año fue asesinado en la ciudad de Cali el Arzobispo Católico Isaías Duarte Cancino quien había denunciado la presencia de dineros del narcotráfico en la financiación de la campaña política actual.

Se debe proceder en todos los niveles a estructurar los valores del ciudadano y a la instauración de una ética pública fundamentada en la solidaridad, el trabajo, el diálogo, el respeto por la opinión, la ideología y las decisiones individuales y colectivas. Se debe educar al ciudadano en el sentido de que si bien tiene unos derechos adquiridos los cuales debe exigir también tiene unas responsabilidades en lo individual y en lo social. Invertir en el capital humano es factor primordial para la convivencia pacífica, el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida.

4. Lucha contra la Impunidad: Las cifras de impunidad del 90% en la mayoría de los delitos es una cifra desesperanzadora en la búsqueda de la paz y la convivencia pacífica. Es por la impunidad y la utilización política de la justicia que se incrementan los hechos delictivos (de 1970 a 1996 han sido detenidas arbitrariamente 78.205 personas) siendo incentivo para el aumento de la delin-

cuencia organizada y la delincuencia común y el paraíso para los actos de corrupción públicos y privados.

Se requiere un sistema judicial libre de sospechas ante la sociedad civil y eficiente en el momento de administrar justicia como mecanismo de darle confianza al ciudadano y erradicarle la costumbre de hacer justicia por sus propias manos. Igualmente se deben hacer los mayores esfuerzos para entrar en una cooperación internacional para luchar contra los delitos transnacionales.

5. Las Libertades individuales y colectivas: Otra tarea para realizar de inmediato. El Estado debe garantizar el libre ejercicio de la libertad personal (un promedio en los últimos 4 años de 3.000 secuestros al año hace que el colombiano no tenga la libertad de libre movilización; millares de colombianos no tienen libertad de fijar residencia ya sea por la extorsión o la amenaza; 2 millones de desplazados internos y 4 millones de colombianos viven en el exterior contra su voluntad). Ningún estado puede llamarse auténticamente democrático si no está en capacidad de garantizar un mínimo de libertades.
6. Libertad de afiliación a los partidos políticos: Hoy en Colombia es más fácil armar una guerrilla, un grupo paramilitar o una banda de narcotraficantes que construir un partido político. Haber dejado ejercer democráticamente el accionar de todos los sectores políticos (caso Unión Patriótica) habría ahorrado millares de vidas y le hubiera dado la oportunidad a Colombia de utilizar el único medio racional y pacífico para dirimir los conflictos ideológicos como es el ejercicio de la democracia.
7. Libertad de Información: Decenas de periodistas han sido asesinados en los últimos 20 años y la Asociación Internacional de Prensa ha manifestado que Colombia es un país de alto riesgo para ejercer la profesión.

Es indispensable que el Estado empiece a asumir su responsabilidad en el sentido de garantizar los mínimos de las libertades individuales y colectivas mediante la estructuración de una política de control a través de los medios legales que otorga la Constitución para erradicar las prácticas tanto de la guerrilla, paramilitares y delincuencia organizada como de agentes del Estado que restringen las libertades de los ciudadanos.

8. Economía: Es urgente democratizar el desempeño económico del país. En Colombia existe una elevadísima concentración de la riqueza en pocas familias. La igualdad de oportunidades y la solidaridad deben ser el fundamento básico de la construcción de un país identificado con el bienestar social.

Hay una lucha permanente por obtener riqueza rápida como único signo de valía dentro de la sociedad, nadie cede nada, nadie quiere compartir. Se necesita urgente la construcción positiva de los vínculos familiares y las redes sociales dentro de valores universales de equidad, responsabilidad y redistribución como fundamento de la construcción de una sociedad civil fuerte que asuma tareas públicas como complemento de la acción del Estado y conjuntamente saque de la exclusión total en que se encuentran el 11% de los colombianos (aprox. 4.500.000). Según los analistas económicos Colombia requiere un crecimiento anual del 4% de su economía durante los próximos 8 años para igualar las condiciones que tenía en 1995, frente al registro de crecimiento actual que es del 2,2%.

9. Empleo. Un país con una tasa de desempleo del 21% requiere de una intervención directa del Estado para la generación de empleo empezando por regular la globalización, realizando una gestión económica moderna y abriendo nuevos espacios de trabajo especialmente con quienes se vieron perjudicados por la apertura económica de los 90 como lo fueron millares de familias campesinas que forzosamente se tuvieron que desplazar a las grandes ciudades viviendo de manera inhumana en su periferia.

El 55% de la población económicamente activa de Colombia tienen un empleo precario o informal que no cuenta a su vez con el apoyo del Estado para tener acceso al crédito o a la capacitación en las nuevas tecnologías que le permitan producir y competir con un mínimo de garantías para la supervivencia como microempresarios.

CONCLUSIÓN

Enfrentar los retos supone grandes esfuerzos y especiales sacrificios para que los colombianos trabajen conjuntamente en una estrategia articulada entre el Estado y la sociedad civil; el próximo Presidente debe conformar un gobierno de TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA que a través de la consulta popular, el referéndum y el plebiscito integre y cohesione a la sociedad colombiana en un propósito fundamental que es la convivencia pacífica y la introducción de un nuevo esquema político y económico acorde con las necesidades y el anhelo de la mayoría de la población. ●